

“El otro campo”: una experiencia de intervención en el cordón frutiflorihortícola del Gran La Plata

Eje 3: Nuevos actores y nuevas sociabilidades. Formas organizativas, experiencias, procesos. Expresiones populares colectivas.

Garrós, Rosario (Estudiante Lic. en Trabajo Social – FTS UNLP)
rosariogarros@gmail.com

Morales Pizzo, Micaela (Estudiante Lic. en Trabajo Social – FTS UNLP)
micaelamoralespizzo@hotmail.com
Contacto: (221) 638-5287

RESUMEN

La ponencia tiene por objeto analizar la práctica de formación profesional desarrollada durante el año 2018 en organizaciones de productores del cordón frutiflorihortícola platense con el fin de visibilizar las condiciones de vida en que se encuentra el sector y problematizar el rol que asume el Estado en el contexto actual.

En América Latina y el Caribe, la Agricultura Familiar representa el 80% del total de los desarrollos agrícolas existentes y, sólo el Cordón Verde de las localidades de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, representa más de 30.000 puestos de trabajo y abastece aproximadamente el 70% de los alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En este marco, se vuelve imprescindible reconocer la importancia estratégica de este sector en el desarrollo socio-económico nacional y provincial.

Durante el año 2018, en el marco de las prácticas de formación profesional de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la UNLP, realizamos – tal como ellos lo solicitaron - un relevamiento sociosanitario y educativo con el fin de recopilar y sistematizar información referida a las condiciones de vida de los productores. Para ello compartimos diversos espacios de participación que nos posibilitaron desarrollar una mirada crítica de las manifestaciones actuales de la cuestión social y de sus estrategias de organización. De esta manera, a partir de los datos construidos, pudimos realizar una devolución y compartir con ellos un espacio de trabajo, para pensar formas de resistencia ante el avance del neoliberalismo y el empeoramiento de sus condiciones materiales de existencia.

En el relevamiento pudimos ver una gran distancia entre las responsabilidades que asume el Estado en el plano formal y lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas: la mayoría de los productores no acceden a la propiedad de la tierra ni a una vivienda digna, presentan dificultades para acceder a los servicios de salud y educación, se encuentran en un reclamo permanente hacia el Estado por la falta de servicios de gas natural, luz eléctrica, cloacas y agua corriente y esto se ve agravado por el uso de agroquímicos para la producción, la falta de capacitación para su implementación y la ausencia de servicios de recolección de residuos vinculados a esta actividad.

En un contexto en que el Estado se configura como una institución orientada hacia los grandes poseedores del capital y abandona a los trabajadores dando de baja distintas políticas sociales que brindaban un acompañamiento a los productores, se vuelve imprescindible la inserción del Trabajo Social en el sector de la Agricultura Familiar,

asumiendo como desafío el análisis, la producción de conocimientos e intervención junto a las familias del cordón.

Palabras claves: Agricultura Familiar, estrategias organizativas, condiciones de vida

INTRODUCCIÓN

La ponencia tiene por objeto describir y analizar la práctica de formación profesional de tercer nivel desarrollada durante el año 2018 en organizaciones de productores y productoras del cordón frutiflorihortícola platense con el fin de visibilizar las condiciones de vida en que se encuentra el sector y problematizar el rol que asume el Estado en el contexto actual.

Durante el año 2018 nos insertamos en el Centro de Prácticas situado en la Casa del Trabajador Rural para comenzar un trabajo de análisis e intervención junto a los trabajadores organizados en cooperativas que se encuentran en Abasto, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Etcheverry, entre otras localidades del Partido de La Plata. Tal experiencia se enmarca en la decisión institucional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata de articular con organizaciones de Productores Familiares que se cristaliza en el convenio firmado en el año 2014 entre el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y dicha unidad académica proponiendo tres ejes de trabajo: investigación, intervención y formación. Así, se inicia un camino de articulación con otras unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata como la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho, entre otras, con “la finalidad de potenciar el trabajo interdisciplinario y lograr una mirada multidimensional” (Allo, Bulich, Burone y Diotto; 2017) y junto a los trabajadores de la Agricultura Familiar partiendo de un intercambio de conocimientos que contemple los saberes populares y académicos.

Dicha práctica se enmarca en acuerdos previos realizados entre las docentes de la cátedra, referentes de las organizaciones territoriales y representantes de instituciones y políticas públicas que articulan en el territorio, quienes nos invitaron a que aportemos al fortalecimiento de las formas organizativas de los actores sociales que allí se desenvuelven. Para ello, ante la ausencia de estadísticas y datos oficiales que reflejen las condiciones de vida de los trabajadores, nos solicitaron que construyamos, desarrollemos y apliquemos en conjunto un instrumento de recolección de información que nos permita conocer la situación socio-sanitaria y educativa.

En este marco, a partir de múltiples aproximaciones, comenzamos a construir un instrumento de recolección de información con el formato de una encuesta que, durante los últimos meses del mismo año, llevamos a cabo entre aproximadamente treinta estudiantes de segundo y tercer año de Trabajo Social. En total, los grupos familiares encuestados fueron aproximadamente cien, representativos de cinco organizaciones que se nuclean en la Casa del Trabajador Rural.

Durante todo el proceso que consistió en sucesivas aproximaciones, participaciones en asambleas, conversaciones informales, entrevistas, lecturas de fuentes secundarias, aplicación del instrumento construido, participaciones en jornadas de lucha y una jornada de trabajo final junto a los productores y productoras, docentes, estudiantes y referentes se hizo hincapié en el desafío de visibilizar la situación actual que atraviesa el sector y darle continuidad a la presencia de la Universidad en el territorio. Es por ello que en la presente ponencia nos proponemos recuperar y realizar un breve recorrido del

trabajo realizado durante las prácticas de formación profesional y presentar sintéticamente los datos obtenidos con el fin de dar cuenta de la situación que atraviesan los productores y productoras del cordón frutiflorihortícola como una expresión específica del avance del neoliberalismo en nuestra región.

DESARROLLO

Consideraciones sobre el cordón frutiflorihortícola platense y la Agricultura Familiar

El sector frutiflorihortícola platense es uno de los cordones más importantes del país y el más grande de la Provincia de Buenos Aires destinado a la Agricultura Familiar. En América Latina y el Caribe, la Agricultura Familiar representa el 80% del total de los desarrollos agrícolas existentes y, sólo el Cordón Verde de las localidades de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, representa más de 30.000 puestos de trabajo y abastece aproximadamente el 70% de los alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En este marco, se vuelve imprescindible reconocer la importancia estratégica de este sector en el desarrollo socio-económico nacional y provincial.

Tal espacio, que lo podemos caracterizar como un territorio periurbano, se destaca por la presencia de trabajadores que han migrado desde distintos países limítrofes y se han instalado en las quintas con el fin de trabajar la tierra.

El territorio periurbano es un espacio geográfico y social entre la ciudad y el campo donde diferentes actividades como industria, granja, horticultura, vivienda, negocios e instituciones públicas se disputaron históricamente el uso del suelo (Ringuelet, 2000; Barsky, 2005). Tal como plantean Gabrinetti y Schiavi (2017), aunque en el periurbano se realicen actividades agrarias, no puede ser pensado como una zona rural tradicional ya que tal categoría suele describir espacios que poseen una relación muy cercana con la naturaleza y una cierta dispersión poblacional, configuración que se relaciona más con los territorios de agricultura extensiva tradicional del interior del país que con el periurbano platense.

La producción frutiflorihortícola de la región platense es parte del cinturón verde bonaerense que comprende un radio de 50 km alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por trece partidos abarcando 7.000 km cuadrados con una superficie dedicada a dicha actividad de aproximadamente 18.000 hectáreas. El periurbano de La Plata, que constituye la estructura agraria más antigua y consolidada del cinturón, es responsable del 72% del abastecimiento requerido para dichos habitantes y además envía su producción al interior de la provincia de Buenos Aires y otras provincias (García, 2010).

Los actores encargados de la frutiflorihorticultura de la zona fueron históricamente migrantes. En un principio eran principalmente italianos, españoles y portugueses, más adelante comenzaron a trabajar allí japoneses y descendientes de europeos y, ya desde mediados de los años 80' y hasta la actualidad, una gran parte de los productores son migrantes en su mayoría bolivianos y, en menor escala, paraguayos y peruanos (Benencia, 2011), no sólo en esta región sino en todas las zonas de producción familiar del país.

Si bien el cordón frutiflorihortícola está signado por una historia de producciones familiares y estrategias de organización en el marco de los distintos procesos políticos que tuvieron lugar en nuestro país, para el presente trabajo decidimos considerar las

transformaciones ocurridas en el sector a partir de la consolidación del neoliberalismo en la región. Fue en este momento en que se comenzó a concentrar la producción, el Estado desmanteló las condiciones favorables para su expansión, se empezaron a exigir productos de mayor calidad, lo que trajo aparejado cambios en los hábitos de producción y consumo a partir de la reconversión tecnológica caracterizada por la difusión de agroquímicos, las primeras semillas híbridas y los invernaderos de polietileno (Simonatto, 2000). Todos estos cambios requirieron una transformación del productor familiar a un productor con perfil más empresarial (Selis, 2000; Simonatto, 2000) a la vez que el Estado renunció a toda regulación centralizada sobre las condiciones de comercialización y los hipermercados comenzaron a negociar directamente con cada productor. Además, por la condición de informalidad se degradaron las relaciones laborales de la región y se flexibilizaron las relaciones entre patrones y trabajadores, expandiéndose las relaciones de mediería y terminándose, de esa manera, los derechos laborales (Castro: 2016).

A partir del año 2003 comenzó una reactivación de la economía que propuso cambios en la estructura frutiflorihortícola. Comenzaron a predominar cultivos rápidos de ciclos cortos, se extendió la adopción del paquete tecnológico, se consolidó una mayor especialización de la producción y se intensificó respecto de las formas tradicionales (Simonatto, 2000). García (2012) sostiene que los tres pilares del nuevo modelo implementado en el sector fueron el rol del horticultor boliviano, la explotación de la fuerza de trabajo sobre la que se asienta su competitividad - observándose una total precarización de la mano de obra a partir de la informalidad laboral y naturalizándose jornadas más largas e intensivas -, y la tecnología del invernáculo.

La consolidación del neoliberalismo produjo, a su vez, la expansión del modelo de agronegocios, por lo que la agricultura quedó expuesta frente a un mercado que avanza poniendo el foco en el lucro y no en el cuidado de los recursos naturales y, menos aún, de los trabajadores, privilegiando lógicas donde las categorías económicas de la competencia, la maximización de la ganancia y el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo constituyen algunos de los imperativos del mercado (Wood: 2009). En contraposición a la lógica de los agronegocios, podemos encontrar la agricultura familiar que, según la Plataforma Tecnológica Regional sobre Agricultura Familiar del PROCISUR (Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico, Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur) es

“un tipo de producción donde la Unidad Doméstica y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente” (2010, pp. 5).

La Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) la define, a su vez, como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”.

A fines del año 2015, a partir de la presión realizada por el FONAF y otras organizaciones, se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que, además de definir a este sector a partir de los criterios antes mencionados, declara de interés público a

“la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de

producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva” (art. 1).

Dicha ley tiene entre sus objetivos la promoción del desarrollo humano integral, del bienestar social y económico de los productores y las productoras, la generación de condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en los territorios rurales - tanto en materia hábitat, como en ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas -, el fortalecimiento de la organización y movilidad social ascendente de los productores y productoras “con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer y la juventud rural”, la disminución del éxodo rural, la obligación del Estado de comprarle a un precio justo a los productores familiares, entre otros. Así mismo, en el art. 31 de tal legislación, el Estado se compromete a “garantizar el acceso y funcionamiento de todos los servicios sociales (educación, salud, deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y promoción social, así como la asistencia social directa) para la totalidad de la población rural en el territorio, en función de que su existencia, continuidad y calidad aseguren el arraigo de las familias rurales” y a formular, diseñar, ejecutar y evaluar políticas sociales desde los territorios rurales “propiciando su elaboración de abajo hacia arriba”.

Sin embargo, aunque dicha ley fue sancionada hace cuatro años, en la actualidad se encuentra sin reglamentar y sin un presupuesto asignado, por lo que los productores y productoras cuentan con muy pocas herramientas legales a la hora de exigirle al Estado que garantice sus derechos.

Es en este marco, tal como plantean Allo, Bulich, Burone y Diotto (2017), que el Trabajo Social tiene como desafío “el análisis crítico e integral del actual escenario socioeconómico, de las modificaciones surgidas en los últimos años en nuestra estructura social, de los problemas que surgen en consecuencia y de las políticas sociales que intentan abordarlos”.

Agricultura Familiar y políticas públicas

Consideramos necesario hacer un breve recorrido por las políticas públicas destinadas al sector de la Agricultura Familiar, comprendiendo que dichas políticas son modos de construir los fenómenos sociales y no solo reacciones del Estado ante ciertos sucesos (Gabrinetti; 2017). En este sentido, el Estado es “la síntesis de la correlación de fuerzas entre diferentes actores en un territorio y un tiempo determinado” (Gabrinetti; 2017) y las políticas públicas son “el conjunto de acciones de gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio del poder político” (Vilas, 2011, p. 2)

Si analizamos las políticas públicas llevadas adelante durante los últimos años, podemos ver que, producto de las luchas y resistencias de los/as productores y productoras y de las diversas organizaciones sociales que acompañaron cada reclamo, el Estado ha intervenido de manera sistemática sobre la Agricultura Familiar. A fines de los años 90’, tal como plantean Gabrinetti y Schiavi (2018) se creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores – RENATRE – “aunque se le asignaron las funciones a un ente conformado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores – uATRE–, la Sociedad Rural, la Confederación Rural Argentina y otros actores patronales pero sin representación estatal” (p. 415). Este organismo funcionó hasta fines del año 2011 cuando se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios - RENATEA -, un ente autárquico bajo la esfera del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dedicado a registrar y fiscalizar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrarios en relación de dependencia, haciendo énfasis en la capacitación laboral, la promoción de derechos, el acompañamiento y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y la intervención en problemáticas de trata de personas con fines de explotación laboral, entre otras cuestiones.

Durante el período comprendido entre el año 2003 y 2015, en sintonía con la exigencia de un mayor acompañamiento al proceso de fortalecimiento del sector, se crearon una batería de entes administrativos y programas sociales destinados a la ampliación de derechos de los productores y productoras de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Coincidimos con Sislian (2013) cuando plantea que las principales razones de los cambios en las maneras de intervenir sobre el sector se vinculan, principalmente, al despliegue de demandas por parte de los productores y agricultores familiares que adquirieron particular dinamismo con la creación en el año 2006 del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), “la oportunidad política abierta por el conflicto entre el gobierno nacional con las organizaciones patronales del campo en 2008 en su disputa por la renta extraordinaria de las exportaciones de soja” (p. 81) y la voluntad política expresada por el nuevo gobierno.

En este marco, se destaca la creación en el año 2009 de una Secretaría de Estado específica de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en el marco de la jerarquización a rango de Ministerio de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Posteriormente en el año 2013, se elevó la Subsecretaría de Agricultura Familiar a rango de Secretaría (Gabrinetti, 2016) y se desarrollaron diversas políticas públicas como la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) y del Foro Nacional de Universidades para la Agricultura Familiar (Foro UNAF), Cambio Rural, el Monotributo Social Agropecuario, Microcréditos, el programa ProHuerta, ProFam y ProInder, entre otros.

Esto se mantiene así hasta que, a fines del 2015, a partir de la Asunción de la Alianza PRO-Cambiamos, el Ministerio antes mencionado se transformó en Ministerio de Agroindustria invisibilizando totalmente a la Agricultura Familiar, se disolvió el RENATEA y comenzó el vaciamiento y desfinanciamiento de programas como Cambio Rural, los Microcréditos y el Monotributo Social Agropecuario generando un aumento en los niveles desprotección de los trabajadores del periurbano platense. Así, el Ministerio de Agroindustria no reconoce a la Agricultura Familiar como modo de producción y esto repercute directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas que se llevan adelante.

De esta manera, el Estado actual, en vez de ser el promotor de los procesos organizativos en el territorio, legislar a favor de los pequeños y medianos productores, subsidiar a los mismos por los temporales que generan desastres tanto en la producción como en sus viviendas, garantizar el acceso de la población a la educación y salud gratuita y de calidad, entre otros derechos, elige posicionarse a favor de los sectores capitalistas y apostar hacia los grandes empresarios, entendiendo que este sector es “*el campo*” - la soja, el trigo, el maíz – y pretendiendo eliminar otros procesos organizativos que se dan en las zonas periurbanas. Esta es la manifestación concreta de un modelo de producción que afianza la concentración de la riqueza en un polo social mientras que, en el otro, sólo crece la pobreza y la miseria potenciando exponencialmente la ley general de acumulación capitalista en que se sustenta la cuestión social (Iamamoto, 2008).

Seiffer y Castro (2016) plantean que “las políticas del macrismo refuerzan la fragmentación y la tendencia a la asistencialización de la política social, pues profundizan

la consolidación de sectores cada vez más amplios de la clase obrera en sobrantes para el capital” a la vez que generan respuestas focalizadas y moralizantes. Además, a partir del nuevo proceso político-económico se ha transformado totalmente la visión de sujeto: ya no se trata de un sujeto de derechos, sino de un individuo responsable de su situación, condenándolo a explicaciones emprendeduristas, meritócratas y culpabilizantes y proponiendo como única respuesta la asistencia social.

En la actualidad, el Estado sigue favoreciendo y permitiendo el predominio de la agricultura terrateniente y especulativa omitiendo que un verdadero desarrollo rural sostenible debería tener como pilar fundamental la agricultura familiar. De esta manera, consideramos un error caracterizar este período a partir de la idea de “ausencia” del Estado ya que se trata, en realidad, de la decisión política de favorecer a las familias terratenientes en detrimento de las mayorías trabajadoras. Son ejemplos claros de ello la transformación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Ministerio de Agroindustria, el restablecimiento del RENATRE y la quita de retenciones a los sectores concentrados de la agricultura terrateniente.

Acerca de las condiciones de vida en el cordón y las formas organizativas de las/os productores/as

Partimos de considerar la cuestión social como la condensación del “conjunto de desigualdades y luchas sociales, producidas y reproducidas en el movimiento contradictorio de las relaciones sociales, alcanzando plenitud de sus expresiones y matices en tiempo de capital fetiche” (Iamamoto, 2008; p.22). Es decir, no se trata solamente de la contradicción capital-trabajo, de las consecuencias y manifestaciones de la misma, sino también de todas las prácticas de resistencia y enfrentamiento desde los trabajadores al sistema capitalista. La autora plantea, a su vez, que la cuestión social

“expresa desigualdades económicas, políticas y culturales de las clases sociales, mediatizadas por disparidades en las relaciones de género, características étnico-raciales y regionalismos, causando que amplios sectores de la sociedad civil no accedan a los bienes de la sociedad” (p. 25).

Además, retoma a Martins (1991) y Yazbek (2001) quienes consideran que la pobreza es un fenómeno multidimensional que no sólo se debe pensar en términos materiales sino también como una categoría política “que implica carencias en los campos de los derechos, de las posibilidades y de las esperanzas” (p. 51). En este sentido, podemos pensar en la situación de los trabajadores y trabajadoras del cordón frutiflorihortícola platense como un ejemplo en que se entrecruzan adscripciones relacionadas con la clase, la condición migrante y el género que no sólo desencadenan desigualdades en los accesos materiales sino también en la ampliación de la ciudadanía.

Durante el relevamiento realizado pudimos visualizar algunas de las manifestaciones de la cuestión social como la falta de acceso a la educación y a la salud integral, múltiples violencias y discriminaciones por parte de instituciones estatales, dificultades en el acceso a los trámites de documentación, precarización y explotación laboral, falta de acceso a la vivienda digna, imposibilidad de acceder a la tenencia de la tierra e irregularidades en los contratos de alquiler lo que les impide construir una vivienda de carácter permanente, problemas de infraestructura (alumbrado, zanjeo, vivienda),

ausencia de espacios de recreación, dificultades en los accesos a los servicios de gas natural, luz eléctrica, cloacas y agua corriente, uso de agrotóxicos para la producción con escasa capacitación para su implementación y ausencia de servicios de recolección de residuos vinculados a esta actividad, entre otras.

Específicamente, de los datos obtenidos mediante el relevamiento podemos destacar, en términos generales, que sólo el 20,6% de las familias encuestadas reciben el Monotributo Social Agropecuario, que el 27,3% accede a la recolección de residuos en sus viviendas y que el 43,2% manifiesta que, en casos de urgencia, las ambulancias no ingresan a la zona. Con respecto a la utilización de agroquímicos, el total de las familias encuestadas manifiestan utilizarlos y, de ellas, el 81,8% no cuenta con un lugar adecuado para almacenar los productos y residuos relacionados a ello y sólo el 34,1% manifiesta utilizar las vestimentas adecuadas para su manipulación.

Por otro lado, con respecto al acceso a las tierras, el 75% de las familias encuestadas manifiestan alquilarlas, mientras que el 11,4% lo hace a través de contratos de mediería, el 6,8% manifiesta trabajar tierras prestadas y el 6,8% es dueño. En el acceso a las maquinarias también se manifiestan desigualdades: un 54,5% las alquila, un 22,7% utiliza maquinarias prestadas y un 15,9% de las familias encuestadas utiliza maquinarias propias. Aquí nos parece importante destacar que algunos de los productores se refieren a alquileres y préstamos desde las organizaciones y otros de manera individual.

Con respecto a los procesos de salud/enfermedad, si bien nosotras habíamos construido un instrumento que pretendía relevar, entre otras cosas, las enfermedades presentes en los territorios, en el momento de realización de las encuestas pudimos notar que las familias se referían a la enfermedad sólo en las ocasiones en las que algún padecimiento les impedía desarrollar la actividad laboral. Así, en un primer momento, las familias manifestaban no tener ningún tipo de enfermedad y, en diversas conversaciones informales, nos comentaron la presencia de enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, musculares y degenerativas.

En relación a esto, nos parece importante insistir que el neoliberalismo ha concentrado la riqueza, flexibilizado los procesos de trabajo y descentralizado la producción y, con ello, ha “planteado una nueva configuración de la clase obrera, con el aumento progresivo del volumen de desocupados, la reducción de trabajadores ocupados formalmente, y la precarización de gran parte de la clase trabajadora” (Fernández Soto, 2009). En este marco, los y las trabajadoras de la Agricultura Familiar – que no pueden generar excedente y sólo se dedican a la supervivencia de la unidad familiar – han empeorado progresivamente sus condiciones materiales de existencia y, con ello, han perdido también posibilidades de participación política y ciudadana.

Sin embargo, durante los últimos años han comenzado a surgir organizaciones de productores y productoras que, a través de diversas estrategias, se proponen luchar por el acceso justo a la vivienda, la propiedad de la tierra y los mecanismos de producción, distribución y consumo. Estas estrategias organizativas comprenden desde la conformación de asociaciones y cooperativas hasta movimientos sociales y federaciones.

Particularmente, durante nuestra práctica de formación profesional trabajamos junto con productores y productoras nucleados en asociaciones que, a su vez, confluían en la Casa del Trabajador Rural y esta, al mismo tiempo, en la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO). Estas asociaciones, en algunos casos, eran nombradas por ellos en términos de “cooperativas” que, siguiendo a Pedro Lisdero (2006), aparecen como una opción para la inserción en el campo laboral tendiente a reconstruir – o, en este caso,

construir - identidades laborales y consolidar lazos sociales, brindándoles autonomía a sus asociados ya que son ellos quienes organizan su trabajo y distribuyen las ganancias. Se trata de una institución de bien común, de un medio de ayuda mutua para beneficio de todos los miembros. Es, en definitiva, una asociación de personas y no de capitales que recupera la centralidad del trabajo y los principios de solidaridad y distribución. En este marco se construyen nuevas identidades colectivas, entendidas como subjetividades que se relacionan y construyen una conciencia compartida dada a partir del reconocimiento como semejantes y, a la vez, diferentes de otros individuos. Se construye, entonces, un “nosotros” producto de una descendencia común, una historia compartida, una distintividad cultural y una solidaridad interna que, aunque no es heterogéneo (Piqueras, 2002), logra construir consensos internos para organizarse social, política y económicamente en el marco de la lucha por la satisfacción de sus necesidades.

Así, los productores lograron convertir situaciones individuales en procesos organizativos colectivos encontrando allí una alternativa ante un mercado laboral que los precariza e intenta excluirlos sistemáticamente llevando adelante procesos heterogéneos de organización, emancipación y resistencia. Sin embargo, creemos necesario pensar la identidad colectiva de los productores nucleados en las asociaciones como un espacio de adscripción, reciprocidad y solidaridad pero también de tensión, conflicto y desigualdades internas para despegarnos de visiones utópicas de los movimientos sociales y restituir el carácter político que todo análisis debe tener. Por último, nos parece relevante considerar la situación de los productores y productoras organizadas/os a partir del entrecruzamiento de clase, etnia y género (Moreno, 1991) para poder llevar adelante prácticas donde no sólo intervengamos sobre las desigualdades inherentes al sistema capitalista sino, también, a un sistema racista y heteropatriarcal.

Durante nuestro recorrido en el territorio pudimos acompañar y analizar diferentes estrategias de organización desarrolladas en el marco del avance del neoliberalismo en nuestro país. Estas estrategias adquirieron diferentes formatos como jornadas de visibilización para difundir la situación en la que viven los productores y exigir políticas públicas que atiendan la especificidad del sector, asambleas mensuales en las que discuten cuestiones relacionadas a la situación social, económica y política actual, estrategias políticas tendientes a construir una unidad en las luchas de la Agricultura Familiar en su conjunto, las futuras acciones para solucionar problemas ligados a la comercialización de los cultivos, la compra de insumos como nylon, semillas, plantines, agroquímicos y abono, la posibilidad de hacer un análisis de los suelos, debates sobre el modelo agroecológico, posibles soluciones ante problemas de algunas de las familias que integran las asociaciones, etcétera.

De esta manera, ante el recrudecimiento de la ofensiva neoliberal y el empeoramiento de las condiciones materiales y simbólicas, los productores y productoras encuentran en las formas organizativas salidas colectivas y estrategias de resistencia, formando nuevos vínculos solidarios y profundamente políticos.

REFLEXIONES FINALES: “EL OTRO CAMPO TAMBIÉN EXISTE”

Para ir finalizando, comenzamos por el principio: el origen del título de la ponencia proviene de una jornada realizada en la Ciudad de La Plata en septiembre del año 2018 en el marco de la Semana de Visibilización de la Agricultura Familiar. En aquella ocasión vimos una bandera realizada por los productores y productoras que decía “*el otro campo*”

también existe” y pensamos que, mediante una consigna concreta, los trabajadores estaban manifestando claramente la decisión política del Estado de apostar y permitir el predominio de la agricultura terrateniente y especulativa omitiendo que un verdadero desarrollo rural sostenible debería tener como pilar fundamental la Agricultura Familiar.

Con el avance de la ofensiva neoliberal, las manifestaciones de la Cuestión Social se han recrudecido y el capital no ha dejado de avanzar sobre el mundo del trabajo. Así, podemos ver un Estado que permite la especulación sobre la estabilidad de los trabajadores y la financierización sobre los procesos de producción. En este sentido, consideramos que ante un Estado que desprotege al sector de la Agricultura Familiar y sólo apuesta a la Agricultura Empresarial que concentra grandes proporciones del capital en pocas manos, se vuelve necesario y urgente construir herramientas que aporten a la visibilización de las problemáticas de estos sectores y a la exigencia de políticas públicas que garanticen los derechos de las poblaciones periurbanas.

En un contexto en que el Estado se configura como una institución orientada hacia los grandes poseedores del capital y abandona a los trabajadores dando de baja distintas políticas sociales que brindaban un acompañamiento relevante a los productores, se vuelve imprescindible la inserción del Trabajo Social en el sector de la Agricultura Familiar, asumiendo como desafío el análisis, producción de conocimientos e intervención junto a las familias del cordón frutiflorihortícola platense. En este sentido, el Trabajo Social también tiene nuevos desafíos relacionados a la necesidad de una alta competencia teórico-metodológica, la comprensión de nuevas manifestaciones de la Cuestión Social y la profundización de los debates acerca de la función social y política de la profesión.

Por último, el nuevo escenario trae consigo nuevos requerimientos a partir de las transformaciones en el mundo del trabajo y la reconfiguración de las políticas públicas, creando nuevos espacios de intervención para los y las trabajadoras sociales. Es por ello que apostamos a la visibilización, intervención y análisis crítico de la Agricultura Familiar e invitamos a seguir debatiendo, reflexionando y construyendo conocimientos sobre la temática.

BIBLIOGRAFÍA

Abelenda, A., Izaza Formoso, S., Macaya, M. y Nieves, M. (2016). Análisis de un proceso de prácticas de formación profesional en el Cordón Hortícola Platense con el Movimiento de Pequeños Productores en el año 2015. III Foro Latinoamericano: "Igualdad y desigualdad social en América Latina: generando debates en Trabajo Social en relación a otras ciencias del campo social". Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64985/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Allo, Bulich, Burone y Diotto (2017). Fortaleciendo las organizaciones sociales y sectores populares vinculados a la cuestión rural desde el Programa de Extensión "Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades". Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63836>

Barsky, A. (2005) El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm>

Behring, E. e Ivanete B. (2009) Política Social: fundamentos e historia. San Pablo, Editorial Cortez. Capítulo 1: "Política social y método". Pto. 3: "La contribución de la tradición marxista" (traducción)

Benencia, R. (1997) Transformaciones en la horticultura periurbana bonaerense en los últimos cincuenta años. El papel de la tecnología y la mano de obra. <https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2012/08/roberto-benencia.pdf>

Benencia, R. (2004) Trabajo y prejuicio. Violencia sobre inmigrantes bolivianos en la agricultura periférica de Buenos Aires. En: *Revue Européenne des Migrations Internationales*. Disponible en: <http://remi.revues.org/291>

Dumrauf, G., Schiavi, M. y Larrondo, L. (2014) La paradoja de un País Agrario sin trabajadores rurales. El desafío del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) en el cinturón hortícola más grande del país. IX Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional: Transformaciones sociales, políticas públicas y conflictos emergentes en la sociedad argentina contemporánea. La Plata, 2 y 3 de octubre de 2014. Disponible en: <http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/jideep>

Feito, M.C. (2014) Migrantes bolivianos en el periurbano bonaerense. Memorias, producciones, trabajo y organizaciones. Disponible en: http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_migrantes_bolivianos_final.epub

Ferraris, G.; Bravo, M. (2014). Organizaciones de productores hortícolas del Cinturón Verde de La Plata. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 3 al 5 de diciembre de 2014, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4751/ev.4751.pdf

Fernandez Soto, S. y Jorge T. (2014). El desarrollo del capitalismo y la nueva configuración de la protección social. La Asignación Universal por Hijo en Argentina. Revista Textos y Contextos v. 13, n. 2. Porto Alegre. Disponible en file:///C:/Users/usuario/Downloads/17977-78701-1-PB%20(1).pdf

Gabrinetti M, Burone E., Dumrauf G., Otondo E., Schiavi M., Reitano P. (2016) Diagnóstico de las condiciones del trabajo; de las percepciones, valoraciones y vivencias sobre dichas condiciones por parte de los trabajadores del sector agrario en Gran La Plata. Informe de investigación. En: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59704>

Gabrinetti, M y M. Schiavi (2018). Construyendo horizontes colectivos. Condiciones de trabajo y estrategias para su transformación en el periurbano platense. Revista Derechos en Acción. Vol. 6. Núm. 6. Disponible en: <https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/issue/view/ReDeA%202018/ReDeA%20Verano%202018>

García, M. (2011). Análisis de las transformaciones de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años. El rol de los horticultores bolivianos. Tesis de doctorado en Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10915/18122>

Giménez, G. (2007) Estudios sobre la cultura y las representaciones sociales. Guadalajara: CONACULTA/ITESO. Capítulo I “La concepción simbólica de la cultura”.

Gordillo, G. (1994). La presión de los más pobres: reciprocidad, diferenciación social y conflicto entre los tobas del oeste de Formosa. En: Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires

IAMAMOTO, M. (2008) Serviço Social em tempo de capital fetiche. Capital financeiro, trabalho e questão social. San Pablo, Editorial Cortez. Capítulo II: Capital fetiche, questão social e Serviço Social. Punto 3 (3.1, 3.2) (Traducción)

Lattuada, M. (2001). Crecimiento económico y exclusión social en la agricultura familiar argentina. Economía Agraria y Recursos Naturales, ISSN: 1578-0732, Vol.1, 2 pp. 171-193.

Lisdero, P. (2006). Acción Colectiva y trabajo. Estudio del caso de la Empresa Recuperada Cooperativa Junín de Salud Ltda. Disponible en: https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/10466/Pedro_Lisdero_-_TFG_-_Accion_Colectiva_y_Trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Moreno, I. (1991). Identidades y rituales. En: Moreno, I. Prat, J. y otros. Antropología de los pueblos de España, Vol. 1, Madrid: Taurus. Págs. 601- 604.

Netto, J. y M. Braz (2007) Economia Política. Umaintrodução crítica. San Pablo, Editorial Cortez. Capítulo 9: El Capitalismo contemporáneo.

Piqueras, A. (2002). La economía. En: De la Cruz, I. y otros, Introducción a la antropología para la intervención social. Valencia: Tirant Lo Blanch. Págs. 196- 219

Piqueras, A. (2002). La identidad. En: De la Cruz, I. y otros. Introducción a la antropología para la intervención social. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Plataforma Tecnológica Regional de Agricultura Familiar (2010). Investigación y desarrollo para la Agricultura Familiar en el Cono Sur. Disponible en: <http://www.procisur.org.uy/adjuntos/255050.pdf>

Rajland, B. (2012). El estado del Estado en Argentina después del 2001. Continuidades y rupturas. en THWAITES REY, Mabel (Editora) El Estado en América Latina: continuidades y rupturas. Santiago de Chile, Editorial Arcis/Clacso. Disponible en <http://bibliotecavirtualclacso.org.ar/clacso/gt/20121127121700/ElEstadoenAmericaLatina.pdf>

Sislian, F. (2013). Políticas Públicas y Agricultura familiar. Los Acuerdos territoriales de desarrollo rural con inclusión como herramientas para una nueva política nacional de desarrollo rural. Disponible en: <http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/623>

Wood, E. (2009). Peasants and the market imperative: the origins of capitalism. In Akram-Lodhi and Kay, C. (ed.), Peasants and Globalization. London: Routledge: 57-82.

Otras fuentes consultadas:

Ley 27.118, Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.